

Honorable Magistrado,

Dr. JAIRO ARMANDO GONZÁLEZ GÓMEZ.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL.

E. S. D.

REFERENCIA:	ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA.
DEMANDANTE:	EFREN ANTONIO HERNANDEZ DIAZ.
DEMANDADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL.
RADICADO:	2019-00121-01.

ROCIO BALLESTEROS PINZON, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.436.224 de Vélez, abogada en ejercicio, portadora de la T. P. No. 107.904 C. S. J., actuando en nombre y representación judicial de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, conforme al poder otorgado por su representante legal, atentamente acudo ante su Despacho para presentar **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA**, con fundamento en las siguientes consideraciones de orden legal, doctrinario, jurisprudencial y probatorio.

**CONSIDERACIONES POR LAS CUALES SE DEBE REVOCAR SENTENCIA
CONDENATORIA A LA UGPP**

Atendiendo a la oportunidad procesal que nos ocupa, es pertinente que el despacho confirme la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Yopal el 01 de febrero de 2021, por cuanto mi defendida no es responsable de efectuar tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social que le permitan responder por la nulidad de traslado de régimen, tal como se expone a continuación:

- El señor **EFREN ANTONIO HERNANDEZ DIAZ** nunca se ha encontrado en el Régimen Transicional, toda vez que cumplió los 60 años de edad el 29 de noviembre de 2017 y dicho régimen culminó el 31 de diciembre de 2014.
- Ya no cuenta con más de 10 años para hacer efectivo el traslado de régimen pensional y, según la norma, no puede autorizarse el mismo.
- Únicamente podría realizarse, si se estructuraran los requisitos del régimen de transición pensional, sin embargo, no los cumple.

La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP** fue constituida como una entidad cuyo objetivo principal es reconocer y administrar derechos pensionales a cargo de administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional o de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando, así

como efectuar tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social, junto con cobro de las mismas, en coordinación con las demás entidades del Sistema de la Protección Social, conforme lo dispuesto en el **artículo 156 de la ley 1151 de 2007 y el Decreto 575 de 2013**.

Por lo anterior, es claro que a la UGPP no le fue asignada funciones como administradora de fondo de pensiones, por lo que **no está habilitada para administrar recursos provenientes del sistema de pensiones, hacer traslado de saldos, aprobar traslado de regímenes de pensionados y demás obligaciones reguladas por el estatuto orgánico del sistema financiero**, de manera que, a quien debe reconocerle y pagar la pensión de vejez, es a quienes consolidaron su derecho pensional, antes de que CAJANAL EICE, cesara sus actividades, esto es antes del 01 de julio de 2009, fecha en la cual se decretó la liquidación de CAJANAL EICE, todos los afiliados cotizantes de la mencionada Caja de Previsión, fueron trasladados en forma masiva al régimen de Prima Media del ISS-ahora COLPENSIONES, en virtud del **artículo 4 del decreto 2196 de 2009**, situación que no aplica con al caso que nos compete.

ARGUMENTOS DE DEFENSA

La defensa presenta este recurso de apelación teniendo en cuenta la normatividad fundamental, constitucional, legal y jurisprudencial aplicable al caso, las cuales relaciono a continuación:

- **DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES – UGPP:**

La legitimación en la causa se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable, bien a las pretensiones del demandante, o bien a las excepciones propuestas por el demandado, consecuente a ello, debe ponerse de presente que, de considerarse procedente la declaratoria de nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual del Demandante, los efectos, no pueden recaer en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES –UGPP, por la sencilla razón que, no actúa como una administradora de pensiones, toda vez que la “Administradora” es aquella entidad de previsión que opera como caja abierta, recibe afiliaciones y cotizaciones a pensiones, emite bonos pensionales; actividades que, se aclara, NO desempeña la UGPP, porque La Unidad solo recibe la función pensional de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando, es decir, cuando ya no es viable recibir más afiliaciones o cotizaciones pensionales.

Por el contrario, la calidad de administradoras pensionales se encuentra expresamente definida en el artículo 20 del Decreto 1513 del 04/08/1998 que modificó el artículo 48 del Decreto 1748 de 12/10/1995, donde claramente no fue incluida la UGPP. Por ello, la Administradora del Régimen de Prima Media –en adelante RMP-, por excelencia lo es COLPENSIONES antes el ISS Asegurador.

Ahora, una vez que el demandante se trasladó al RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD - RAIS, el fondo al que se transfiere está en la obligación de solicitar la liquidación provisional del “Bono pensional Tipo A” consagrado en el artículo 2 del Decreto Ley 1299 de 1994, es decir, el traslado de aportes hechos como funcionario público, por ende, las posibles cotizaciones realizadas por el interesado a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN

SOCIAL - CAJANAL, están incluidas en aquel bono solicitado por el fondo al cual se encuentra afiliado el peticionario, que se expide a aquellas personas que se trasladen del régimen de prima media al régimen de ahorro individual.

Por lo anterior, mi defendida tampoco es responsable por los posibles aportes que se hayan realizado a CAJANAL, cuando las mismas se incluyeron en el Bono Pensional mencionado, toda vez que éste constituye recursos destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones y que son títulos de deuda pública destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados del Sistema General de Pensiones.

Reconocer el derecho sería entonces contrario a las disposiciones legales vigentes y aplicables, por cuanto mediante Decreto 1748 de 1995, modificado por el art. 20, Decreto Nacional 1513 de 1998, que establece que *“Las administradoras estarán obligadas a verificar las certificaciones que expidan las entidades empleadoras o cajas, de tal manera que cuando sean recibidas por el emisor, sólo sea necesario proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento de las cuotas partes”*.

- **DE LA FALTA DE TITULO Y CAUSA Y CARENCIA DEL DERECHO RECLAMADO:**

Teniendo en cuenta todos los argumentos de hecho y derecho previamente descritos, bien es cierto que el causante nunca se ha encontrado en el Régimen Transicional, toda vez que cumplió los 60 años de edad el 29 de noviembre de 2017 y dicho régimen culminó el 31 de diciembre de 2014, siento totalmente evidente que **ya no cuenta con más de 10 años para hacer efectivo el traslado de régimen pensional y, según la norma, no puede autorizarse el mismo.**

Además, es improcedente el reconocimiento de la devolución de cotizaciones que el interesado hubiera realizado a CAJANAL E.I.C.E. hoy en liquidación, ya que las mismas debieron ser incluidas en el bono pensional que fue reclamado por el fondo privado al que se trasladó, de manera que cobrarlas sería realizar una doble erogación de la misma cotización.

Con todo, la obligación legal que sí le asiste a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, es la de reconocer y pagar a sus afiliados o sus beneficiarios que acrediten debidamente los derechos, las prestaciones económicas de los funcionarios del Estado Colombiano, es decir, Invalidez, Vejez y Muerte, lo cual no aplica al caso que nos compete, pues mi defendida no está facultada por ley para encargarse de trámites de traslado de régimen, ni tampoco para administrar cotizaciones de aquellos que se trasladan.

- **DE LA BUENA FE:**

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP siempre ha actuado y actuará de buena fe, en concordancia con el ordenamiento jurídico que nos gobierna, con fundamento en el artículo 83 de nuestro ordenamiento Constitucional, que a la letra dice:

“ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.”

Aunado a ello, en sentencia del 31 de octubre de 2018, expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo radicación 17001-23-33-000-2015-00584-02(0480-17), se trató el tema de la buena fe, en los siguientes argumentos:

“En cuanto al alcance del citado principio, la Corte Constitucional ha sostenido:

*(...)La jurisprudencia constitucional ha entendido el principio de buena fe “como una exigencia de **honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad** que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, **cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a la luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma.** En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico.”*

Así, la buena fe es uno de los principios que rige las relaciones entre la Administración y los administrados y se caracteriza por ser leal, honesta y esperada. A partir de lo esbozado anteriormente, es claro que uno de los componentes esenciales de las actuaciones de buena fe es el respeto por la confianza otorgada por las partes. (...)”

Así entonces, es cierto que mi defendida ha aplicado para el presente caso la misma decisión que se ha dispuesto para casos similares, de manera que la demandada no puede afirmar que la respuesta hallada para su solicitud viola la confianza legítima que se presume de la entidad.

En consecuencia, debe ser declarada la Buena fe de mi defendida, quien actúa como demandada en el proceso bajo estudio, porque ha actuado y actúa leal y honestamente para con sus administrados.

PETICIÓN ESPECIAL

Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados que se **CONFIRME** la sentencia de Primera Instancia dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Yopal el 01 de febrero de 2021 y, en consecuencia, se absuelva nuevamente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, de las pretensiones de la Demanda, pues el señor EFREN ANTONIO HERNANDEZ DIAZ, se afilió a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS HORIZONTE Hoy PORVENIR S.A el 01 de febrero de 1999, de manera que éste fue el último fondo donde reportó cotizaciones para así adquirir su derecho pensional, el cual está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al fondo de solidaridad, con el fin de otorgar unas prestaciones que dependen del monto que los afiliados tengan en su Cuenta de Ahorro Individual.

Ahora, a la Cuenta de Ahorro Individual de un afiliado al RAIS ingresan las cotizaciones, los aportes voluntarios, los rendimientos financieros y el Bono Pensional Tipo A si lo hubiere, de

manera que NO le es posible regresar al Régimen de Prima media, teniendo en cuenta su traslado Voluntario al Régimen de Ahorro Individual, debiéndose entonces aplicar las reglas establecidas por el Artículo 2o de la Ley 797 de 2003.

Por lo tanto, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP no puede responder con el patrimonio del Sistema General de Pensiones por las pretensiones de la parte demandante, pues de hacerlo contribuiría aún más al detrimento patrimonial del financiamiento del sistema pensional, más aún, cuando está claramente establecido, que la Entidad que represento, actúa dentro de los parámetros que rigen el Sistema Pensional Colombiano y bajo el Principio de Buena Fe Constitucional.

NOTIFICACIONES

Las personales las recibiré en su despacho o en la calle 34 No. 10-29. Centro Empresarial BELUZ. Oficina 401. Bucaramanga. Teléfono: 6970298. Celular 3144137331. Correo electrónico: rballesteros@ugpp.gov.co

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto 806 de 2020, emitido por el Ministerio de Justicia y el Derecho, para adoptar medidas de implementación de tecnologías en los procesos judiciales, manifiesto que la dirección electrónica del demandante y su apoderado judicial para notificar es asopensionescolombia@gmail.com, según correo aportado con el escrito de la demanda.

Por otra parte, manifiesto que también me es desconocida la dirección electrónica del agente del Ministerio Público delegado para el presente caso.

Atentamente,



ROCIO BALLESTEROS PINZON.

C.c. 63.436.224 de Vélez (Sder).

T.P. 107.904 del Consejo Superior de la Judicatura.